

Caracterización de la sociedad colombiana

En medio de un mundo caracterizado por el proceso de globalización descrito, Colombia comparte una serie de atributos, valores y principios con la comunidad latinoamericana de naciones. Todos estos países tienen similitudes, y en buena parte detentan las mismas ventajas y las mismas debilidades. Sin embargo, la historia y la realidad contemporánea de Colombia presentan elementos particulares que determinan sus alternativas de inserción en el mundo y su participación en los procesos internacionales.

LA ECONOMÍA COLOMBIANA

La economía colombiana se distingue al menos por tres rasgos específicos que la diferencian de las demás naciones latinoamericanas en las últimas décadas: estabilidad relativa, crecimiento moderado y urbanización acelerada.

Durante los años ochenta, que fueron considerados una «década perdida» por el estancamiento que afectó al conjunto de América Latina, Colombia mantuvo un crecimiento positivo, aunque bajo. Y mientras el desbordamiento monetario y los programas desfinanciados de gasto público llevaron a muchos países a sufrir altas tasas de inflación, en Colombia éstas se mantuvieron controladas.

La composición de las exportaciones colombianas se ha modificado en las últimas dos décadas aunque todavía predomina el sector primario. Se ha reducido la participación del café y se ha aumentado la exportación de minerales y energéticos. La participación de los sectores agrícola e industrial en el producto interno bruto (PIB) ha descendido en las dos últimas décadas (cerca de cuatro puntos porcentuales en cada caso desde la década de los setenta) sin que se hayan diversificado la estructura productiva ni las exportaciones manufactureras como en otros países del hemisferio.

En 1990 Colombia inició la transformación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones que había sido el patrón desde finales de los años cuarenta. El crecimiento económico bajo este esquema, adoptado en toda América Latina y el Caribe después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a frenarse en los setenta. La expansión del mercado interno se redujo significativamente. El cambio técnico y el aumento de la productividad perdieron dinamismo; las ineficiencias y distorsiones derivadas del sistema proteccionista eran un severo freno a la economía; y las dificultades técnicas y sobre costos elevados para sustituir ciertas

materias primas y bienes de capital importados por producción doméstica, contribuyeron a estrangular el proceso de sustitución.

El modelo tradicional exigía una regulación estatal de la economía, la protección de la industria local mediante aranceles altos y prohibiciones o cuotas a las importaciones. El acceso a las divisas, su precio, la obtención de crédito a tasas de interés diferentes de las de equilibrio, eran algunos de los aspectos de la actividad económica que se administraban. El proceso de industrialización demandaba también grandes inversiones en empresas productivas que eran capitalizadas con recursos públicos.

Posteriormente, a raíz de la crisis de la deuda en muchos países fue necesario optar, como consecuencia de la condicionalidad impuesta por la banca acreedora internacional, por la casi total estatización del sector financiero para nacionalizar y reestructurar su endeudamiento externo.

Tras la crisis de la deuda que afectó al continente desde comienzos de los años ochenta con muy pocas excepciones -entre ellas, Colombia- varias economías iniciaron un cambio del modelo de desarrollo. En 1990, al final de la Administración del presidente Virgilio Barco (1986-1990), se hizo una reducción general de aranceles que fue profundizada en el gobierno del presidente César Gaviria (1990-1994) y complementada con la eliminación de barreras para-arancelarias. Se produjo también la liberación de los controles cambiarios, la desregulación parcial de tasas de interés y el desmonte de ciertas restricciones del mercado laboral. Así mismo, se inició un proceso de privatización de empresas estatales. Todas estas medidas respondieron a un nuevo modelo de desarrollo orientado "hacia fuera": la

apertura económica y la reforma estructural. Esta transformación fue similar a la que ocurrió en el resto de América Latina y el Caribe y se denominó genéricamente la reforma económica.

El ritmo de las reformas en Colombia, sin embargo, no fue uniforme ni cubrió todos los sectores, y en algunos campos no se completó. Además, algunos de sus avances se revirtieron parcialmente. Presiones políticas y acciones de hecho por parte de sindicatos estatales frenaron la desregulación y la privatización de los sectores de comunicaciones, petróleo y refinados; en la seguridad social y la salud se desmontaron medidas que pretendían estimular la participación privada. El proceso, entonces quedó de alguna manera inconcluso.

Además, la inversión productiva se ha visto frenada por los siguientes hechos: la elevada rentabilidad de las actividades ilícitas y especulativas y el enriquecimiento fácil, por un lado, y el carácter contradictorio del conjunto de reglas y la incertidumbre jurídica, por el otro; aspectos que son fundamentales para generar confianza en los empresarios. La inversión extranjera se ha orientado en buena parte al sector minero energético y hacia entidades que se han privatizado, especialmente del sector financiero y eléctrico. Se ha dejado relegada la inversión en infraestructura física, que es en Colombia mucho más atrasada e ineficiente que el promedio de países de la región.

Desafortunadamente, tampoco se ha avanzado seriamente en un proceso de reconversión industrial, modernización de la actividad productiva y adecuación del patrón de producción con el objetivo de aprovechar las oportunidades que pueda brindar el nuevo escenario internacional. Situación aún más problemática se da en

el caso del sector agropecuario, en especial en determinados ramos de la actividad agrícola. La economía colombiana ha venido modificando su patrón de especialización otorgándole primacía a los recursos naturales no renovables, con una pérdida relativa de la importancia de los sectores agropecuario y manufacturero.

De otra parte, desde hace unos años ha germinado una seria crisis estructural de las finanzas públicas nacionales que, de no enfrentarse pronta y drásticamente, afectará cada vez más de modo nocivo la estabilidad y el crecimiento económicos y la profundización del proceso descentralizador.

Latinoamérica es una de las regiones del mundo en que menos se ha avanzado en la reducción de la pobreza y en Colombia, a pesar de su sostenido crecimiento y no obstante mejoras en el nivel de vida de su población, éstas no han sido sustanciales. Ni el modelo sustitutivo de importaciones altamente regulado que imperó por casi cincuenta años ni el modelo de apertura menos regulado han reducido el nivel de inequidad en la distribución del ingreso y sólo han disminuido lentamente la extensión de la pobreza.

Aunque entre 1990 y 1995 el empleo urbano tendió a modernizarse, la escasez de mano de obra calificada llevó a incrementar el salario del personal especializado y profesional y condujo con el tiempo a obstaculizar la generación de nuevos puestos de trabajo y a deteriorar la competitividad internacional de actividades intensivas en mano de obra calificada.

Simultáneamente, la agudización de diversas formas de violencia en el sector rural -con el consecuente efecto sobre el riesgo y costo de producción-, las deficiencias en infraestructura y otros servicios, el ineficiente patrón de especia-

lización vigente en ciertos rubros del sector agropecuario y la competencia externa de productos sustitutivos, afectaron negativamente los niveles de productividad, competitividad e ingreso rural de manera casi generalizada.

Todo lo mencionado demuestra el reto que plantean el desempleo y la inequitativa distribución del ingreso, la pérdida de competitividad, la baja inversión y el perverso patrón de crecimiento para poder asegurar la sostenibilidad del modelo de desarrollo y el mejoramiento del bienestar colectivo de la población.

El nuevo modelo requiere una participación más activa de la sociedad civil para corregir falencias del anterior a la luz de la realidad colombiana.

ECONOMIA Y NARCOTRAFICO

En la situación económica de Colombia hay sin embargo un aspecto particularmente negativo, cual es el impacto de la economía ilegal, en especial el cultivo, procesamiento y tráfico de drogas ilícitas. A pesar de las dudas sobre la calidad de las cifras disponibles, se puede afirmar que Colombia ha mantenido una posición dominante en esta actividad. A mediados de los setenta fue el primer productor mundial de marihuana, en los ochenta y comienzos de los noventa fue el principal exportador de cocaína, y recientemente ha llegado a ser un productor importante de hoja de coca y amapola.

El peso de las drogas en la economía ha sido significativo. A pesar de que los estudios en esta área no pueden tener el rigor estadístico deseable por la misma naturaleza ilegal de la actividad, se ha mostrado que, durante los últimos tres lustros, el ingreso anual neto de divisas del tráfico de drogas ha variado entre el

3.5% y el 6.5% del PIB, equivalente entre un 25% y un 35% de las exportaciones legales del país –con una tendencia a situarse en los límites inferiores en los últimos cuatro años.

El dinero proveniente del tráfico de drogas ha tenido efectos que han dinamizado en cierta forma la economía colombiana. La demanda agregada se ha expandido, el flujo de dólares contribuyó a subsanar el grave problema cambiario de mediados de los ochenta, y algunas actividades específicas recibieron un innegable impulso. No obstante, los efectos negativos de estos ingresos ilegales fueron mucho mayores que los supuestos beneficios:

- Ante la imposibilidad de canalizarse normalmente, el dinero de las drogas ha distorsionado los precios relativos de los bienes y servicios en aquellos sectores en los que ha podido invertir.
- Se ha revaluado el peso, pues la abundancia de dólares en el mercado cambiario ha estabilizado artificialmente su valor. Los exportadores colombianos se han resentido por esta situación: mientras los costos aumentan por la inflación, los ingresos se reducen por la revaluación.
- Los precios de la propiedad raíz y la construcción, donde se ha canalizado parte de este flujo, han subido en forma excesiva y artificial durante los últimos veinte años. Se ha mantenido así una alta tasa de valorización de los activos de este sector por encima de las tasas de rentabilidad normales en los sectores productivo y comercial y se ha desestimulado la inversión productiva.
- La inversión del narcotráfico en propiedades rurales ha sido descomunal. Se ha concentrado la propiedad en el campo, y se ha revertido el modesto efecto redistributivo de los programas de reforma agraria. La

presencia de narcotraficantes en un número sustancial de municipios ha fortalecido su influencia y su poder.

- El contrabando ha servido para que se inviertan excedentes del narcotráfico. Por lo tanto, se ha favorecido la presencia de los bienes de contrabando en el mercado nacional, de por sí estimulados por la revaluación del peso.

El dinero de la droga no sólo distorsionó perversamente los precios claves de la economía sino que estimuló comportamientos nocivos como el enriquecimiento fácil, el consumo suntuario en detrimento del ahorro y la inversión productiva. Todo esto limitó los beneficios eventuales de los ingresos de la droga según criterios adecuados de rentabilidad social y económica.

Entre los elementos determinantes para la surgimiento y reproducción del narcotráfico en Colombia sobresalen los siguientes: la crisis de representación política; el clientelismo, la corrupción y la impunidad; la falta de presencia territorial y la pérdida de legitimidad del Estado; el debilitamiento del imperio de la ley; la ausencia de una política de tierras de carácter reformista y redistributiva; y otros problemas estructurales de la sociedad como la inequidad en la distribución del ingreso y la pobreza. Precisamente en condiciones como éstas reside la razón de ser de la ventaja competitiva de las actividades ilícitas del narcotráfico en Colombia.

CONTINUIDAD ELECTORAL, PERSISTENCIA DE LA VIOLENCIA Y EXPANSION DE LA POLITICA ARMADA

La historia política de Colombia se distingue porque ha tenido elecciones continuas y gobiernos civiles durante un período mayor que el de cualquier país

en toda la región latinoamericana. Colombia es el país con mayor continuidad de procesos electorales. Desde la independencia de España se han producido cuatro dictaduras militares sin origen electoral: la de Urdaneta (septiembre 1830-abril 1831) y la de Melo (1854-1855) en el siglo pasado, y la de Rojas Pinilla (1953-1957) y la Junta Militar de Gobierno que lo sucedió (1957-1958) en este siglo. En total, poco más de un lustro.

No sufrió Colombia la presencia de regímenes caudillistas, tan usuales en la región, ni tampoco tuvo en esta segunda mitad del siglo -a pesar del conflicto armado interno- los regímenes militares anticomunistas del tipo «seguridad nacional» que abundaron en el continente. Los partidos políticos colombianos, liberal y conservador, encuentran su origen directo en las ideologías políticas europeas del siglo XIX y han tenido predominio desde entonces. A diferencia de otros países latinoamericanos, no se consolidaron en Colombia, como alternativas viables, los repetidos intentos por crear partidos obreros, expresiones social-demócratas o alternativas populistas. La fuerza del bipartidismo ha sido constante por siglo y medio y ha generado un grado de fidelidad muy alto. A lo largo de los años, desde 1933 hasta 1990, el 88% de las municipalidades colombianas ha mantenido una continuidad en su lealtad a uno de los dos partidos. Es decir, tres generaciones de colombianos residentes en nueve de cada diez municipios ha mantenido su apoyo electoral y pertenencia a uno de los dos partidos históricos. Al mismo tiempo el partido comunista, no obstante su carácter minoritario, tiene una trayectoria de siete décadas.

Pero el bipartidismo liberal-conservador, a pesar del profundo sentimiento de identificación, ha experimentado un

marcado debilitamiento en su perfil ideológico y ha hecho del clientelismo, de la repartición de cargos en la administración y de la utilización indebida de funciones y recursos del Estado, su modo de actuación típico. El clientelismo, creciente y rampante desde el Frente Nacional, ha distorsionado la naturaleza de la política y le ha expropiado a los ciudadanos el sentido de la participación en los asuntos públicos. Los partidos son maquinarias electorales que no cumplen el papel de articulación y agregación de intereses por lo cual no desempeñan la fundamental tarea de tramitar los conflictos sociales existentes.

A partir del Frente Nacional también se ha delineado una característica sobresaliente de la política: Colombia es una democracia electoral en la que no existe una oposición institucional que se proyecte como alternativa de poder. Ha habido disidencias pero no oposición. En el último medio siglo, sólo durante la Administración del presidente Barco se optó, conscientemente en el gobierno, por tener oposición institucional: no compartir con los partidos derrotados la responsabilidad política de gobernar.

En las administraciones posteriores (Gaviria y Samper) se constituyeron coaliciones que desbordaron el bipartidismo tradicional al incorporar nuevas expresiones políticas resultantes de los acuerdos de paz y de las nuevas reglas introducidas por la Constitución de 1991 que propician el pluralismo político.

También desde los cincuenta, desde la explosión de la violencia entre liberales y conservadores, se instauró en Colombia una forma de política armada, una cierta tolerancia con el uso de la intimidación, y una determinada promoción de medios violentos para disuadir opositores, para proteger simpatizantes y para asegurar lealtades partidistas. En ese sentido:

- Si bien el Frente Nacional contribuyó a civilizar las costumbres políticas, el bloqueo institucional que produjo sirvió de pretexto para quienes optaron por la vía armada.
- En los últimos años se ha recrudecido la tendencia hacia la política armada, tanto por parte de la guerrilla frente a sectores civiles, del narcotráfico frente a políticos tradicionales, de paramilitares frente a la población civil, y por parte del Estado y de políticos tradicionales que buscan, mediante arreglos con sectores armados, acceso a zonas controladas por ellos para poder hacer proselitismo político.
- La política es en ciertas regiones de Colombia un ejercicio derivado del control armado. No se la concibe sin protección armada y de otro lado toda organización armada, sea ideológica como la guerrilla o delincuencial como las mafias, tienen intereses en la vida política y electoral.

El Estado colombiano es precario. No representa los intereses mayoritarios de la sociedad y puede decirse que hay más gobierno que Estado. Esto tiene que ver con la escasa legitimidad y el débil alcance territorial del Estado que no llega a todas las regiones y cuya presencia no se extiende a todos los sectores sociales. Un Estado incapaz de aplicar y de hacer respetar las leyes, genera una proliferación de alternativas privadas, muchas veces armadas, para la resolución de conflictos, lo que hace muy tenue la legitimidad de las instituciones. Se produce así el desplazamiento del valor social de lo público por la supremacía otorgada al interés particular/privado, la glorificación de lo individual, la disolución de los lazos de solidaridad y consecuentemente el relegamiento del principio rector de la convivencia ciudadana.

La entrada de los intereses de las mafias de las drogas a la política tuvo un efecto corruptor determinante. La penetración del narcotráfico en la política lleva muchos años y fue antecedida por su incidencia económica en los ámbitos financiero, ganadero, industrial y comercial. Su dimensión ha crecido y su alcance se ha extendido territorialmente. Al principio la penetración de dineros de las drogas en la política se dio en los departamentos en los que tenían sede los capos de la droga, y luego se ha dado hasta niveles tan extendidos como los de la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) en 1994 y varias campañas al Congreso.

La financiación de campañas electorales con dinero ilícito ha sido de especial gravedad para el carácter democrático del sistema político colombiano. La financiación ilícita ha cambiado la lealtad de los políticos involucrados, trasladando ésta de su partido a su financiador. Ha reducido a bajísimos niveles la credibilidad de la ciudadanía en los políticos y en general en el sistema electoral. Ha distorsionado el sentido público de la política y del debate parlamentario: los proyectos de ley sobre justicia, sobre relaciones exteriores, o sobre seguridad, están potencialmente viciados por la presencia de quienes desde sus curules en el Congreso, defienden las posiciones de los traficantes. Por ejemplo, los debates sobre el Estatuto Nacional de Estupefacientes en 1986, la introducción de una enmienda sobre la extradición en la Reforma Constitucional de 1989, las reformas al Código de Procedimiento Penal en 1993, o la discusión de leyes sobre medidas antinarcóticos -extinción del derecho de dominio de bienes de origen ilícito, aumento de penas, extradición- entre 1995 y 1997, sugieren que el Congreso ha sido dramáticamente penetrado por el narcotráfico.

Como ha ocurrido en otros países, la mafia como grupo de presión ha propugnado por un espacio para su consolidación económica y social, así como para lograr la impunidad jurídica de sus asociados. En ese sentido la mafia de las drogas se ha movido en Colombia, no sólo como una mafia clásica, o sea como un grupo de crimen organizado con grandes recursos económicos sino que, además, ha actuado consistentemente como un grupo de presión que ha buscado, con terrorismo y con influencias políticas, avanzar en el reconocimiento jurídico, económico y social. No es ya una clase emergente, como se le llamaba en los años setenta, sino una clase que surgió, que se ha consolidado y que se labró por todos los medios, legales e ilegales, su inserción en la sociedad colombiana.

Por eso llegó a la política para buscar allí influencia o acceso directo a la conducción de los asuntos públicos, pues son la política y los cuerpos colegiados el camino para lograr las modificaciones legales favorables a sus intereses. La primera modalidad fue la de buscar acceso directo de los jefes mafiosos al Congreso. La segunda buscó obtener favoritismo e influencia de algunos congresistas a través de la financiación de sus campañas. La relación entonces era por afinidad regional entre políticos y mafiosos del mismo departamento. La tercera fase se dio en las elecciones de 1994 cuando los traficantes pretendieron asegurar una influencia decisiva en la más alta instancia de decisión política: la propia Presidencia de la República.

La concentración de inversiones de los traficantes en propiedades rurales les ha dado una especial condición de dominio territorial que se expresa en la conformación de grupos armados para proteger sus intereses y en la incidencia en la política local, y la conducción de los asuntos públicos y privados de las localidades.

Las relaciones de poder en Colombia, como resultado de los fenómenos descritos, han llegado a ser altamente desinstitucionalizadas e interferidas por el imperio de las armas. El acuerdo de gobernabilidad que fue el Frente Nacional no se ha sustituido por uno más legítimo. Por el contrario, al haberse perdido el sentido de lo público, se ha clientelizado el ejercicio del poder, se ha sectorizado el ejercicio de la política, se ha perdido la capacidad de hacer consensos, y en general se ha desinstitucionalizado el ejercicio de gobierno y la función pública. La autoridad estatal también está sujeta a extremos, o se abusa de ella o ella es débil o inexistente. No hay un punto medio en el ejercicio de la autoridad legítima, de una autoridad que no abuse, que no sea arbitraria, que se respete y no se exceda.

La sociedad civil ha estado relegada históricamente y la crisis de la política la ha debilitado. Ha sido sustituida progresivamente por formas armadas de participación; y la crisis de representatividad común a la política y a la organización social y popular es también una deficiencia que realza la debilidad de las expresiones legítimas de la verdadera sociedad civil.

El Frente Nacional también significó el fin de la intervención en la contienda electoral de la Iglesia Católica, que desde comienzos de la República había sido tradicional. Sin embargo, su participación en la vida política continúa como lo muestran, entre otros, los procesos de pacificación y diálogo. A partir de las definiciones de la Constitución de 1991, se inauguró una etapa de moderación religiosa. Han crecido en la última década con mucha fuerza nuevas iglesias cristianas, especialmente en sectores populares. Colombia ha dejado de tener un Estado confesional.

La participación de la mujer en Colombia, en comparación con el resto del continente,

sin ser del todo satisfactoria ha mostrado avances en términos de educación, capacitación y participación laboral y política. Las diferencias promedio en salarios entre géneros han disminuido, pero las diferencias en niveles de empleo han aumentado y se sigue observando discriminación contra la mujer.

La relación civil-militar, tan traumática en el resto de América Latina, en Colombia ha mostrado una gran capacidad de avenirse, pero no ha estado exenta de tensiones episódicas. La intervención en política de este sector no ha sido traumática ni desbordada, a pesar de la persistencia del conflicto interno armado.

En síntesis, la característica de la sociedad colombiana ha sido: moderación y acomodamiento, por un lado; pero indiferencia con los desbordamientos y la aceptación de la violencia como herramienta de lucha política, por el otro. Ante la ausencia de debate y de oposición política, ha habido complacencia ante la apropiación privada de lo público. Así se ponen en evidencia las limitaciones históricas de la democracia colombiana. Un Estado que no representa a la sociedad adecuadamente, una falta de reformas económicas (en el campo y en el nivel urbano) profundas, unos partidos que no tramitan conflictos y una sociedad civil con tan precaria expresión política lleva a una pérdida del sentido de lo público, a un debilitamiento del imperio de la ley, y a una extensión de prácticas armadas y de la intimidación como métodos políticos.

UNA SOCIEDAD MULTIÉTNICA, URBANA Y CON PREDOMINIO DE VALORES MATERIALES

Colombia tiene una población no homogénea, con las mismas fuentes de

poblamiento que la mayoría de los países del continente: amerindio, africano y europeo. La composición étnica no hace de Colombia un extremo excepcional en ningún sentido, salvo por lo reducido de las migraciones europeas, después del período colonial.

El país tiene una composición étnica diversa. Muestra un relativo grado de avance respecto a los derechos étnicos de las minorías, en especial de los indígenas y en menor medida de las poblaciones de origen africano. La Constitución les reconoce derechos especiales sobre territorios, sobre cultura y sobre respeto a autoridades tradicionales indígenas. Así mismo, existe un mecanismo de representación política especial para indígenas en el Senado y para negritudes en la Cámara de Representantes. Este reconocimiento de derechos no ha sido una concesión graciosa de una sociedad predominantemente mestiza. Los indígenas han adelantado por muchos años luchas, principalmente pacíficas, por sus tierras y sus derechos, han logrado una organización política importante, han reconstruido culturas y tradiciones, y han sufrido represión y persecución. El lugar que hoy tienen las poblaciones indígenas en Colombia ha sido claramente ganado por ellos mismos.

La organización de las poblaciones de origen africano es más incipiente, pero la Constitución Nacional y las leyes que la desarrollan, hacen reconocimiento expreso a sus derechos culturales y territoriales.

Aunque Colombia es una sociedad multiétnica, hay discriminación abierta e indirecta. Existe desigualdad evidente entre la mayoría de origen europeo y mestizo y las minorías indígena y africana. Sobresale un creciente reconocimiento multiétnico y el inicio de un proceso hacia una sociedad

multicultural, pero esta situación es también un factor de tensión interna en una época en la que lo étnico y lo cultural son una fuente cada vez más significativa de conflictos y un vector relevante de las relaciones transnacionales.

La estructura poblacional colombiana tampoco sobresale del promedio latinoamericano. Evidencia una reducción moderada de la tasa de natalidad en las últimas tres décadas, una disminución leve en la tasa de mortalidad, una mayor esperanza de vida y un consecuente envejecimiento del conjunto poblacional. Lo sobresaliente de la estructura de población colombiana es una diferencia significativa entre sexos en el rango de edades entre 15 y 25 años. Hay 300.000 hombres menos que mujeres en este rango, situación excepcional y peculiar, explicada por el impacto de la violencia sobre la población masculina.

Hacia 1951 el 61.3% de la población colombiana vivía en áreas rurales y el 38.7% en zonas urbanas. En 1964 las cifras se habían revertido y el 48% de la población era campesina y el 52% urbana. La contundencia de ese cambio se percibió con claridad en el caso de Bogotá: en 1951, la capital tenía 660.000 habitantes y apenas trece años después llegó a 1.662.000. Hoy se cree que supera los 6.000.000 de habitantes.

La masiva migración del campo a la ciudad se agudizó por la violencia política que había padecido Colombia desde finales de los cuarenta y durante los cincuenta, por los altos índices de natalidad, por la escasez de tierras para cultivar y por la atracción que las ciudades ejercían sobre los habitantes en virtud de las oportunidades que ofrecían.

De esta manera, Colombia estaba completando en quince años un ciclo de

urbanización que en países desarrollados había exigido casi un siglo. La mayoría de esta nueva población urbana no tenía conocimientos ni medios para ejercer oficios específicos; lo cual la alejaba aún más de la posibilidad de satisfacer sus mínimas necesidades materiales. Fue inevitable que los cordones de miseria rodearan las principales ciudades, desbordando las posibilidades del Estado para atender las necesidades de empleo, vivienda, educación, salud, servicios públicos que agobiaban a sus habitantes.

A su vez, muchos campesinos desplazados violentamente de las tierras que laboraban, prefirieron seguir buscando el acceso a la tierra propia para cultivar. Se dirigieron a abrir nuevas zonas de colonización en lugares lejanos de las zonas agrícolas principales. Sus destinos más frecuentes fueron las áreas selváticas planas y los piedemontes y espacios relativamente aptos para el cultivo en las cordilleras adyacentes a las fronteras agrícolas. Al asentarse en esas zonas, y sin saberlo, estos desplazados estaban abriendo el espacio en buena parte a los problemas de la violencia y el deterioro ambiental.

Las posibles soluciones a estas necesidades estaban necesariamente ligadas al éxito del proceso de industrialización que el país estaba siguiendo, el cual guardaba similitudes con los del resto de Latinoamérica: el modelo de sustitución de importaciones.

En la actualidad, la distribución de la población en Colombia entre rural y urbana es similar al promedio latinoamericano y existe una tendencia ascendente a la urbanización. En lo que se muestra una situación excepcional es en cuanto a la distribución espacial, pues en Colombia el mayor centro poblado no reúne más del 20% de la población total. En América

Latina, en promedio, la ciudad más poblada representa entre 60% y 70% de la población total del país, y la primera ciudad es más de diez veces la suma de las tres siguientes.

En la ubicación espacial de la población, Colombia también es peculiar: no tiene una concentración especial en las costas o en los puertos, sino que la caracteriza un cierto equilibrio poblacional entre zonas costeras e interiores.

La disponibilidad de recursos naturales diferencian a Colombia de otras naciones latinoamericanas. Colombia es el segundo país con más alta biodiversidad en el mundo, después de Brasil. Tiene el 10% de las especies animales y vegetales. Posee el 8% de los bosques naturales tropicales y es el cuarto país con mayor cantidad de agua por unidad de superficie.

En Colombia la sociedad civil es débil en su capacidad de expresión, en su base organizacional y en la representatividad de las organizaciones. Formalmente, existen varios miles de organizaciones en la sociedad civil (más de cuarenta mil juntas de acción comunal, más de diez mil cooperativas, miles de clubes y asociaciones). Sin embargo, los movimientos sociales han sufrido una persistente violencia. El alto número de organizaciones no significa fortaleza ni que sean ejes de procesos alternativos -o no estatales- de mejoramiento social y desarrollo. Ello tampoco implica que la capacidad de interlocución de estas organizaciones frente al Estado haya mejorado, ni que la capacidad de defensa del interés público sea elevada.

Colombia sobresale, en comparación con otros países de América Latina, por sus transformaciones culturales. En la educación, hay mejoras cuantitativas aunque el

aumento en la cobertura no ha estado acompañado por una mejor calidad.

La cultura colombiana ha recibido el impacto de la globalización a través de los medios de comunicación masiva y en razón del impacto que producen en sus familias y en su medio los migrantes colombianos. El mayor efecto en lo cultural ha provenido también del narcotráfico que ha generado un cambio de valores, no sólo en cuanto a la tolerancia frente a los valores de la ilegalidad, sino porque ha creado una exaltación del dinero y de la posesión de bienes materiales, sin importar su origen. Esta distorsión en la escala de valores es uno de los aspectos más delicados en la sociedad colombiana. El estudio, el trabajo, el respeto, la disciplina y el esfuerzo, han sido relegados por valores materialistas orientados al enriquecimiento inmediato fácil.

PROBLEMAS ESTRUCTURALES

La violencia es una de las características sobresalientes de la vida colombiana. Desde hace diez años los índices de muertes violentas superaron los más atroces ocurridos en los años cincuenta, en el clímax de la violencia partidista. Los índices de criminalidad, que resultan de las múltiples formas y tipos de violencia -alrededor de ochenta homicidios por cada cien mil habitantes- superan de lejos los de cualquier otro país del mundo. La violencia es el principal asunto por resolver para los colombianos.

Colombia ha avanzado en la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. Con todo, no se ha llevado a cabo la reconversión, adecuación y modernización del aparato productivo que demandan las exigencias de una inserción activa y sustentable del país en el nuevo escenario internacional. La búsqueda de una

inserción global requiere de una reestructuración y de tasas de inversión y crecimiento mayores que las de las últimas décadas, si a la vez se pretende atacar a fondo el problema de la pobreza e incorporar dignamente a la economía y a la sociedad a millones de colombianos. Este imperativo exige reformas que garanticen la sostenibilidad del modelo y que le permitan a la economía crecer suficientemente en condiciones de estabilidad y de equidad distributiva.

En lo político se ha generado una doble crisis de participación y de representación. De un lado, los colombianos poco participan de las decisiones políticas, poco utilizan las posibilidades que les ha dado la Constitución de 1991, poco creen en general en los beneficios de la participación. De otro lado, también se observa una profunda crisis de representatividad. A pesar de un número alto de organizaciones de base y de una extensa red de organizaciones de representación de intereses, existe una debilidad en la capacidad de acción de estas organizaciones. Sus líderes tienen escasa fuerza para decidir por sí solos y las decisiones no tienen la profundidad que la pretensión de la organización indica. Adicionalmente el fraccionamiento de las organizaciones les resta representatividad.

La prolongada existencia de grupos armados ilegales ha sido un problema sin solución para Colombia. Desde los años cincuenta las agrupaciones armadas, grandes o pequeñas, ideológicas o delincuenciales, han tenido presencia en la compleja geografía colombiana. De estos grupos el mayor nivel de organización y la mayor capacidad de perturbación la han tenido las guerrillas. Además de sus fuentes de financiación –en particular las originadas en las drogas, secuestro y extorsión– que les ha permitido un fortalecimiento territorial y militar, la guerrilla cuenta con una base social principalmente en las zonas donde es evidente

la ausencia, ineficiencia o debilidad del Estado y en aquellas áreas donde se han multiplicado por lustros los conflictos agrarios sin resolución. Las fuentes de financiación, la presencia prolongada en distintas regiones y la dudosa legitimidad de muchos actores sociales y políticos le han otorgado una fuerza persistente a la actividad insurgente en Colombia. En años recientes el crecimiento del paramilitarismo, en respuesta al auge guerrillero, en el contexto de un comportamiento ineficaz de las Fuerzas Armadas y con el respaldo del narcotráfico y de empresarios rurales, ha agudizado de manera dramática el deterioro del orden público y la violación de los derechos humanos.

El fenómeno de las drogas no es ajeno a los graves problemas sociales, políticos, económicos y culturales existentes en la sociedad colombiana, se nutre de ellos y a su vez los potencializa. El tamaño y la dispersión territorial de la guerrilla ha estado, en alguna forma, estimulado por sus nuevas fuentes de financiación, entre ellas, las resultantes de sus vínculos con el narcotráfico; la eclosión del paramilitarismo fue facilitada en buena medida por el narcotráfico; la crisis de legitimidad política está ligada a la corrupción, la impunidad y la asociación de sectores de la clase política con los carteles de la droga; la crisis de credibilidad de las instituciones – Gobierno, Congreso, corporaciones públicas, organismos de control, justicia, Fuerzas Armadas– encuentra buena parte de su origen en que fueron penetradas por dineros de las drogas; la economía ha sido distorsionada por el impacto del emporio de las drogas que ha afectado la competitividad de la producción local, la inversión productiva y el trabajo; la violencia y el terrorismo se han desbordado con el comportamiento sangriento de las mafias de las drogas; y en el terreno ético y moral el crimen internacional organizado ha deformado el conjunto de valores de la sociedad colombiana.

